

Comisión Legislativa llama a la calma por conflicto territorial

Con más de 13 años en litigio, esperan que la resolución definitiva se emita en los próximos meses; Atizapán demanda que se respete su territorio

ALEJANDRA REYES

La Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México hizo un llamado urgente a los alcaldes de Atizapán y Jilotzingo para evitar confrontaciones entre habitantes, mientras se determina a qué municipio pertenece la comunidad de Rancho Blanco.

Román Cortés Lugo, presidente de dicha comisión, exhortó a ambos gobiernos municipales a respetar los cauces institucionales y no incitar a la población a generar conflictos.

"Ya se está trabajando en el análisis legal, histórico y administrativo. El dictamen será emitido por la Comisión Legislativa, y debe garantizar que no se afecte a los ciudadanos", afirmó.

El litigio por Rancho Blanco lleva más de 13 años. Cortés Lugo confirmó que ambos alcaldes ya se presentaron ante la comisión y que el caso será dictaminado en próximos meses.

"Nos hemos reunido con Pedro Rodríguez, alcalde de Atizapán, quien ha solicitado que se respete la zona como parte de su municipio", señaló.

Uno de los puntos más polémicos es el desarrollo inmobiliario en la zona. Carlos Madrazo Limón, primer regidor y exalcalde de Atizapán, aseguró que Rancho Blanco pertenece a Atizapán y denunció que se construyen viviendas sin licencia en una zona boscosa. "Jilotzingo no tiene capacidad para brindar servicios como agua, transporte o seguridad. Es Atizapán quien puede hacerlo", declaró.

Madrazo advirtió que se trata de una extensión de aproximadamente 350 hectáreas, que incluyen parte del cerro Chiluca, el Club de Golf Valle Escondido y fraccionamientos de Zona Esmeralda.

"Se están talando árboles de forma indiscriminada. Se habla de más de 40 mil viviendas en edificios. Esto pone en riesgo nuestros acuíferos", alertó.

El proyecto Bosque Diamante, actualmente suspendido judicialmente, ha sido señalado por autoridades de Jilotzingo como una amenaza ambiental.

Por su parte, el alcalde Raziel Chavarría, del PVEM, afirmó que Rancho Blanco históricamente ha pertenecido a Jilotzingo, donde los habitantes pagan impuestos y reciben servicios. "La continuidad geográfica y el arraigo comunitario nos respaldan", dijo.

Criticó las declaraciones de la síndica Leylany Richard, presidenta de la Comisión Legislativa de Límites Territoriales de Atizapán, y la acusó de desconocer el tema. "Vamos a defender Rancho Blanco con argumentos sólidos", dijo.

Mientras que el presidente municipal de Atizapán, Pedro Rodríguez Villegas, ha mantenido una postura reservada. Reconoció que el desarrollo de más de 20 mil viviendas está suspendido y que el conflicto es revisado por el Instituto de Información Estadística y Catastral del Estado de México. No ha emitido una declaración directa sobre el Rancho Blanco.

La Comisión Legislativa de Límites Territoriales será la encargada de emitir el dictamen definitivo. Mientras tanto, se pide a ambas partes evitar presiones externas y respetar el proceso legal.